

Reflexiones finales

Los estallidos sociales reconfiguran el presente

Jaime Preciado Coronado

■ Doi: 10.54871/ca25es9b

La discusión realizada entre las personas expertas en los seis países y en el caso de las Caravanas Migrantes, con los coordinadores de este libro, fue muy motivante para pensar en el legado que dejan los estallidos sociales analizados en torno del difícil tránsito de la acción colectiva, de los movimientos sociales, hacia comunidades políticas de pertenencia, sean instituidas en los diversos regímenes y sistemas políticos y de partidos, o sean instituyentes, que prefiguran nuevas relaciones entre Estado y Sociedad con sentido comunitario innovador. Aquí se reflexiona sobre el impacto contemporáneo de los estallidos sociales de 2019, actualizando hasta 2024 –la discusión previa a este libro abarcó hasta 2023– los alcances, limitaciones y obstáculos democratizadores para cada uno de los siete casos estudiados.

Nos preguntamos sobre la evidente fractura política que vive el gobierno boliviano, en contraste con el proyecto político de Evo Morales, el rumbo de los conflictos y su impacto sobre un amplio tejido de organizaciones sociales, étnicas y de personas trabajadoras.

En el caso chileno, nos interrogamos sobre la aparente desmovilización y desencanto que invade respecto de la movilización tan

masiva entrañada en el estallido social de 2019, luego de la derrota –¿parcial o total?– que significó la Constituyente pacífica, las luchas de contenido al menos antineoliberales que tanta profundidad tienen en la historia reciente de Chile.

El estallido social colombiano nos preocupa, al estar en juego la prometedor construcción comunitaria que apoya al gobierno progresista de Gustavo Petro-Francia Márquez, tanto en el ámbito de las demandas de cambio económico estructural, de justicia socioambiental, de esfuerzos por darle piso a la Paz Total impulsada por ese gobierno, que fueron nutridas por una amplia gama de actores sociales que buscan un sentido de pertenencia democrática transformadora.

Nos inquieta la brecha que se abrió luego del estallido social de 2019 en Ecuador, entre comunidades políticas de pertenencia que luchan por el Estado progresista, y comunidades con poder instituyente con bases indígenas y populares, que combinan la lucha electoral desde dentro y contra el Estado, o bien por impulsar procesos comunitarios autónomos del Estado. La falta de convergencia entre ambos procesos organizativos da pie a la reproducción del poder oligárquico, al desmantelamiento del Estado social y a la dominación de los poderes fácticos, entre ellos del crimen organizado.

Haití, es un caso dramático que borda la tragedia. Si bien el estallido de 2019 abría esperanzas de reformas económicas estructurales, de controles sociales de la corrupción y de demandas de gobierno capaz de disminuir y evitar la violencia, en 2024 han terminado por imponerse las pandillas territorializadas, el crimen organizado y el colonialismo oligárquico interno. La larga data de intervenciones extranjeras y de acciones multilaterales contra la violencia estructural, por los derechos humanos y por un gobierno popular electo, no cuentan con el respaldo suficiente, interno y externo, para procesar esas demandas.

El caso de Puerto Rico parece esperanzador. Las recientes elecciones generales y presidenciales de noviembre de 2024 hacen

visible un arduo, constante y extendido trabajo organizativo que ha logrado converger en una coalición política entre movimientos sociales de base trabajadora y popular, con añejas luchas por la independencia y la soberanía nacional de ese país. De la que ha resultado un activismo comunitario combinado con la militancia partidista, que está definiendo nuevos términos de lucha para terminar con el carácter “libre y asociado” del Estado puertorriqueño, bajo el impulso de nuevas formas de democracia participativa autónoma frente a Estados Unidos.

Un acierto que reivindicamos en este libro es haber tratado las Caravanas Migrantes, nacidas entre 2018 y 2019, como un estallido social propiciado por movimientos sociales transnacionales, que interpelan las diversas escalas, estatales y no estatales, en que se constituyen comunidades políticas de pertenencia: el espacio local, nacional, supranacional y global. En los lugares por los que transitan comunidades efímeras de personas migrantes, estas desafían cada uno de esos Estados nacionales, particularmente, la “frontera vertical” entre México, y Estados Unidos como lugar al que transitan a lo largo de México y que aspiran llegar a Estados Unidos. Donde, en 2024, se realizaron elecciones presidenciales con una agenda anti migratoria “triunfante”, que seguirá avivando conflictos frente a las Caravanas Migrantes.

A continuación, se presentan, una por una, las tres preguntas generadoras del debate al que convocó este libro, por cada uno de los siete casos estudiados:

1) ¿Qué procesos sociopolíticos convergen en la formación de las comunidades políticas de pertenencia instituidas en el gobierno, en los Estados nacionales, y en los procesos comunitarios instituyentes?

- Políticas de identidad.
- Políticas de reconocimiento.
- Políticas de pueblo (“pueblos en movimiento”).

Bolivia

La fuerte división producida en el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha generado un escenario peligroso de cara al futuro. La rivalidad entre Evo Morales y el presidente Luis Arce, impacta a la base social organizada. La comunidad política de pertenencia (CPP) ahora dividida, que se había reforzado luego de recuperar el poder nacional en las elecciones de 2020, dio pie a que, en la próxima contienda electoral de 2025, la derecha pudiera hacerse otra vez con el gobierno. Sin embargo, más que una oposición maniquea entre dos liderazgos que compiten, ya lo había señalado el intelectual Rafael Bautista desde el 2018 de modo recurrente, el proceso sociopolítico apunta a un desmoronamiento implosivo dentro del propio partido de gobierno que sufrió el golpe de estado en el 2019. “Porque no se trataba de un golpe al gobierno, lo proyectado de ese golpe era el asalto del estado plurinacional y su carácter indígena y popular”. (Aznares, 2024).

Rafael Bautista, entrevistado por Aznares (2024) señala desajustes entre la estrategia electoral del MAS y la soberanía política que iba ganando el pueblo, pues la candidatura de Luis Arce fue decidida por Evo Morales, sin haber escuchado planteamientos electorales desde

la base del propio movimiento. Así, se ha erigido una burocracia, que se mantuvo aparte en los catorce años del gobierno de Evo, la cual ha servido a intereses particulares y no a la consolidación de un proyecto popular. Simplemente eran intereses partidarios, que tienen que ver con el mantenimiento y la amplificación del poder ya obtenido.

Si el relevo en el gobierno boliviano en 2020 había fortalecido la soberanía política popular de movimientos sociales con políticas de identidad, como los Cocaleros, o de reconocimiento, como los asuntos económicos enfrentados por la Central Obrera Boliviana, la lucha política por el Estado no logra un tránsito fluido entre los movimientos sociales y la CPP instituida. Un dilema típico del progresismo, entre facciones especializadas en políticas de gobierno, y movimientos colectivos politizados con demandas de justicia social que rebasan el plano electoral.

Chile

A cinco años del estallido social, cabe preguntarse si esta enorme movilización desembocó en un conjunto articulado de prácticas transformadoras, o si predomina el desencanto de cara a lo no conquistado, a lo que fue derrotado. Concatti (2024) constata que muchas demandas clave como salud, pensiones y justicia social siguen sin resolverse. Dice que la sensación de estancamiento y la falta de avances concretos generan frustración en las organizaciones populares del pueblo chileno. Además, la conquista del poder de parte de Gabriel Boric y las esperanzas iniciales que suscitó se vieron confrontadas. Sin duda, Chile vivió uno de los eventos más trascendentales de su historia reciente en el estallido social, pero tal movilización masiva que puso en evidencia profundas desigualdades sociales, económicas y políticas que habían estado latentes durante décadas, ¿deja sentidos de pertenencia en las comunidades políticas chilenas?

Concatti (2024) cita datos del Centro de Estudios Públicos (CEP), en diciembre de 2019, cuando un 55 % de los chilenos respaldaba las manifestaciones, lo que evidenciaba el amplio apoyo social que tenía el movimiento. “Entre las demandas más urgentes se encontraban la reforma al sistema de pensiones, la mejora del acceso y calidad de la educación y la salud, así como la redacción de una nueva Constitución que dejara atrás el legado institucional de la dictadura”. El periodista hace notar que, en octubre de 2020, el 78 % de los votantes aprobó en un plebiscito la creación de una nueva Carta Magna. “Sin embargo, el camino hacia la transformación no fue sencillo. A lo largo de los cinco años desde el estallido, Chile experimentó una serie de reveses y desencantos. El rechazo a dos propuestas de nueva Constitución –la primera en septiembre de 2022, con un 62 % de los votos en contra, y la segunda en diciembre de 2023– generó una sensación de frustración en la ciudadanía, que ve cómo los cambios prometidos no terminan de concretarse”.

Colombia

En 2024, se conmemoraron cinco años del primer estallido social en 2019 (Ahumada, 2024). Entonces, el malestar social en Colombia marcó la movilización masiva del 21 de noviembre de 2019, que fue una respuesta a las políticas gubernamentales y las injusticias sociales. En el estallido social de 2019, destacó la falta de diálogo por parte del gobierno y la violenta represión de las protestas, lo que provocó numerosas víctimas y violaciones de los derechos humanos. Los disturbios fueron alimentados por temas profundamente arraigados como las políticas de exclusión y el desprecio del gobierno por los acuerdos de paz. Tal descontento contribuyó al éxito electoral de Gustavo Petro, reflejando un cambio en el panorama político. Particularmente en las constelaciones de comunidades políticas de pertenencia instituidas en el gobierno, pues el triunfo del progresismo repercutió en la configuración del Estado nacional,

y redefinió relaciones de poder a través de procesos comunitarios instituyentes entre organismos sociales de trabajadores del campo y la ciudad, organismos feministas, colectivos de jóvenes que conquistaron espacios callejeros, y demandas autonómicas de pueblos originarios y afrodescendientes.

En torno de esas constelaciones de actores se detonaron procesos sociopolíticos convergentes en el ámbito electoral, que repercutieron en la formación de alianzas o coaliciones políticas que estuvieron, y, en cierta medida, siguen vinculando movimientos sociales y formas tendenciales comunitarias con sentido de pertenencia. Entre estas coaliciones políticas destaca una creativa práctica democrática que combinó políticas de identidad, cuyo caso más evidente y simbólico fue la participación de Francia Márquez como figura afrodescendiente en la Vicepresidencia colombiana, con políticas de reconocimiento vinculadas con la defensa de derechos de ciudadanía respecto de las pensiones, la salud, la educación e, incluso, el cuidado del ambiente. En los años que van del gobierno de Petro-Márquez, se registran intentos por deslindar al gobierno de la renta extractivista, mediante audaces medidas para disminuir el consumo de energéticos fósiles. No obstante, hay políticas de pueblo (“pueblos en movimiento”), particularmente en torno de conflictos sobre la tierra entre las comunidades indígenas organizadas –los pueblos nasa del Cauca colombiano, entre los principales–, que marcan su distancia frente al proceso instituido gubernamental de Petro. (Más adelante, trataremos el significado de los procesos de paz de cara a sentidos comunitarios de pertenencia).

Ecuador

En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró que Ecuador enfrentaba un “conflicto armado interno” debido al incremento de la violencia y la actividad de grupos criminales organizados, considerados “organizaciones terroristas y actores no estatales

beligerantes“. La Asamblea Nacional respaldó unánimemente esta decisión. Además, se aprobó un referéndum en abril de 2024 que introdujo medidas de seguridad más estrictas.¹ A mediados de 2024, se enfrentan una de las crisis energéticas más severas de las últimas décadas: apagones generalizados que afectaron a gran parte del país. Esta situación exacerbó las tensiones sociales y políticas, generando críticas hacia la gestión gubernamental y su capacidad para garantizar servicios básicos (*France 24*, 2024).

El gobierno de Daniel Noboa enfrentó crisis políticas significativas durante 2024, que desafiaron la cohesión y estabilidad del gobierno: las relaciones conflictivas con la Asamblea Nacional, disputas con la vicepresidenta Verónica Abad y controversias relacionadas con la incursión en la Embajada de México en Quito (*El Universo*, 2024). En febrero de 2024, el presidente lanzó una Consulta Popular que buscaba implementar reformas legales y constitucionales. De las 11 propuestas iniciales, seis fueron aprobadas tras el control de la Corte Constitucional, mientras que otras cuatro, que implicaban cambios a la Carta Magna, superaron un segundo filtro. Esta iniciativa reflejó el interés del gobierno en promover cambios estructurales en la legislación ecuatoriana (*El Telégrafo*, 2024).

El gobierno anunció planes para subastar áreas de la Amazonía ecuatoriana a empresas petroleras, alegando haber obtenido el consentimiento de las comunidades indígenas locales. Sin embargo, organizaciones indígenas, como la comunidad Waorani, negaron haber sido consultadas adecuadamente y expresaron su oposición a la explotación petrolera en sus territorios ancestrales. Este conflicto subrayó las tensiones entre el desarrollo económico y la protección de los derechos indígenas y ambientales (*El País*, 2024).

¹ Esta y todas las referencias en este apartado sobre Ecuador, fueron obtenidas de ChatGPT: ([en.wikipedia.org https://en.wikipedia.org/wiki/2024_Ecuadorian_conflict?utm_source=chatgpt.com](https://en.wikipedia.org/wiki/2024_Ecuadorian_conflict?utm_source=chatgpt.com))

El 21 de agosto de 2024, la Coordinación Nacional de las Organizaciones Sociales de la Izquierda y Progresismo del Ecuador, propone un “Pacto Ético de no Agresión, con Diálogo Político”. Un llamado que parece convocar a un momento de unidad en medio de difíciles conversaciones, entre los partidos y movimientos de izquierda, que parece caminar. Si finalmente se logra, dice Paz-y-Miño (2024) “no solo será un paso inédito, sino esperanzador para el país y reforzará las perspectivas de éxito electoral para 2025, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo”.

Haití

Es difícil hablar de comunidades políticas de pertenencia emancipadoras en Haití, pues el panorama político luego del estallido social de 2019 se caracteriza por la inestabilidad continua y la influencia generalizada de las pandillas, que han socavado significativamente la gobernanza y la seguridad. La situación sigue siendo precaria debido a cuestiones estructurales y dependencia del apoyo internacional. Cabe preguntarse si las pandillas son las responsables del desmantelamiento sistemático del estado haitiano, y si esto reconfigura comunidades políticas de pertenencia con sentido de dominación. “Las bandas criminales –financiadas e instrumentalizadas por los poderes dominantes controlan gran parte de la capital, provocando miedo y desplazamientos de población. En Puerto Príncipe se registran 130 mil desplazados internos” (Observatorio en Comunicación y Democracia, 2024 b). Un dominio que ya abarca la totalidad del territorio nacional.

Es terrible la ambigüedad de la violencia de las pandillas. Ya no se enfrentan entre sí por el control territorial, como lo venían haciendo durante años, ahora, las bandas criminales como el G9 y el Gpèp, las más poderosas que operan en Puerto Príncipe y sus alrededores, acordaron en 2024 un pacto de no agresión para establecer un frente unido contra las autoridades. Aunque su programa

político no es antiautoritario, sus modos de convergencia han variado. Su batalla brutal por la hegemonía utilizando una violencia indiscriminada contra la población civil, incluidas violaciones colectivas de mujeres y menores, las pandillas impulsan una nueva federación ¿una forma comunitaria de pertenencia?, “Viv Ansanm” (“vivir juntos” en creole haitiano), que también ha saqueado e incendiado escuelas, centros de salud, negocios y residencias privadas.

Puerto Rico

La actual crisis económica, exacerbada por las medidas de austeridad presupuestal impuestas por la autoridad fiscal en manos del gobierno estadounidense, sigue provocando un descontento generalizado y protestas que intensifican el conflicto político. Las políticas de reconocimiento se dan en torno del deterioro de la infraestructura eléctrica, aunado a las insuficientes medidas para la reconstrucción de la Isla frente al mal manejo del impacto de los desastres ambientales. Así, las políticas económicas actuales sirven para reforzar la subordinación política y económica al gobierno de Estados Unidos. 2024, marcó el octavo aniversario de la Ley Puertorriqueña de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica (PROMESA) que alienó aún más a los ciudadanos, ya que despojó a la gobernabilidad local de poderes fiscales e impuso medidas de austeridad, frente a la cual se aglutinan demandas que cuestionan al gobierno de Puerto Rico en el proceso de reestructuración de su deuda. Y en sus intentos por llegar a un Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero las partes no estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo.

El estallido social de 2019 decantó una nueva relación entre actores sociales organizados y movimientos sociales que combinan reivindicaciones económicas, políticas y culturales. En las elecciones generales de 2024 se presentó un elemento novedoso (Rumbo Alterno, 2024), “la creación de la Coalición Sindical, un grupo que

reunió a más de 25 sindicatos en el país y presentó un programa político titulado ‘Propuestas para el país que merecemos’”. Un esfuerzo que apoyó al Movimiento Victoria Ciudadana. Además, se creó el primer Comité de Acción Política Sindical en Puerto Rico, con la ayuda del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU).

Puerto Rico ofrece una convergencia plausible entre políticas de identidad y de reconocimiento. En las protestas también se incorporaron expresiones culturales, como la danza y la música, que sirvieron como formas de resistencia y solidaridad comunitaria. La creación cultural abarcó desde las grandes figuras mediáticas como Ricky Martin y Bad Bunny, hasta actividades performativas impulsadas por el feminismo y los grupos LGBTQ+, los jóvenes, los movimientos sociales ambientales y por los derechos humanos. Un activismo cultural que contribuyó a un sentimiento antineoliberal más amplio, vinculando las luchas locales con los movimientos globales por la justicia social.

El estallido social de 2019 sigue influenciando la prefiguración de políticas de pueblo en torno del debate sobre la independencia, la soberanía y la autonomía, desde los partidos políticos hasta nuevos movimientos de base que rehacen las luchas nacionales por la equidad, la justicia y las autonomías comunitarias. Como sucede en otros estallidos sociales, los sentidos políticos de pertenencia comunitaria se contraponen entre los populismos nacionalistas, supremacistas y racistas; entre progresismos con distintos grados de vinculación con los movimientos sociales, y entre luchas comunitarias autónomas que prescinden del Estado. Así se confirmó en las elecciones generales de noviembre de 2024, donde cristalizaron dos coaliciones políticas, además de un intersticio crítico que aún es minoritario.

Caravanas migrantes

Fue un acierto comprender que las caravanas migrantes detonan procesos sociopolíticos muy específicos que convergen en la formación de las comunidades políticas de pertenencia instituidas en el gobierno, en los Estados nacionales y en las instituciones internacionales. Las Caravanas modifican el mapa geopolítico del mundo, de América Latina y el Caribe, en su propia identidad estratégica regional, y en los límites que imponen las migraciones internacionales y nacionales, forzadas o voluntarias, en cada uno de los Estados nacionales por las que transitan y eventualmente residen millones de personas.

No obstante, las personas en movilidad también crean espacios comunitarios instituyentes, y la originalidad de las Caravanas Migrantes reside en la fuerza de la acción colectiva para protegerse en su trayectoria contra el crimen organizado que les asola, además de crear formas de solidaridad comunitaria en sus prácticas cotidianas corporales para alimentarse, resguardarse, cuidar su salud y, eventualmente, de presentar demandas colectivas frente a las autoridades migratorias. Aunque las tácticas de estos movimientos sociales han variado con el tiempo. Cuando surgen las Caravanas, la masividad marcó su estrategia para ser visibilizadas, crear un impacto mediático y reforzar la capacidad de negociación de su estatus de refugiados. Sin embargo, y paradójicamente, la masividad también permitió un control más focalizado por parte de las autoridades migratorias sobre los grupos en movimiento. No obstante, la espontaneidad organizativa de estos colectivos fue capaz de descentralizar su movimiento en grupos pequeños, capaces de adaptarse a enfrentar y resistir de modos particulares, flexibles y manteniéndose en red, el control que ejercen las autoridades migratorias.

Frente a las políticas de identidad nacional, “Las personas migrantes, como epítome de lo extraño que desequilibra una supuesta

cohesión social erigida como mito fundacional de determinado colectivo, nación o ‘identidad’, se ha convertido en la figura a través de la cual canalizar las frustraciones de un mundo en guerra consigo mismo” (Ruiz-Estramil, 2024). Luego del surgimiento de las Caravanas entre 2018 y 2019 las identidades nacionales acotadas por fronteras territoriales implosionan, gracias a la interpelación de estas “comunidades políticas en movimiento”, que desdoblan solidaridades y rechazos. Son conmovedoras las imágenes creadas por la solidaridad al paso de migrantes en refugios y prácticas solidarias contruidos por sociedades locales, a lo largo del paso por esto que se ha llamado “frontera vertical” en México, pero también llegamos a un momento “en el que las fronteras no buscan solamente delinear un territorio, sino también contener, controlar, coartar, pero sobre todo filtrar movilidades entre deseadas, aceptadas e indeseadas. Y es que, sí, los discursos anti migratorios esconden su contradicción en bravuconas consignas, dirigidas solo hacia colectivos ubicados en la subalternidad económica” (Ruiz-Estramil, 2024), o el color de piel, los cuerpos racializados por las políticas de identidad antiinmigrante.

Es muy amplio el abanico de políticas de reconocimiento abiertas por las Caravanas durante sus más de cinco años de existencia; lo notable es que las demandas tradicionales en torno del reconocimiento como refugiados y con derecho al asilo se han reforzado por la acción colectiva, además, han cristalizado sentidos de pertenencia alrededor de la resistencia contra la represión, la exclusión racista y la discriminación. Ello ha impactado naciones y localidades de paso, así como ha recreado vínculos políticos en las naciones que expulsan población. De hecho, la relación entre la política internacional migratoria y el reconocimiento de las raíces estructurales que generan los procesos migrantes ha tenido consecuencias sobre comunidades políticas de pertenencia en organismos multilaterales, como el Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador, Honduras) y todos los países de nuestra región, así como han generado nuevos mapas de participación electoral, particularmente en Estados Unidos en las elecciones presidenciales de 2024.

2) ¿Cuáles son los sujetos portadores de comunidades políticas de pertenencia emancipadoras?

- Desde dentro y contra el Estado
- Autonomías comunitarias sin estado

Bolivia

Pese al resultado de un plebiscito que fue ganado por quienes se oponían a la reelección, Morales siguió empeñado en ella. Su revanchismo se mostró cuando llegaron los comicios de 2019 pues buena parte de los movimientos que lo apoyaron ya le daban la espalda y la mayoría de la población seguía rechazando su candidatura. De acuerdo con Zibechi (2024), “Años atrás había dado ‘golpes de Estado’ contra dos de las más importantes organizaciones sociales: el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob). En el primer caso, envió a la policía a desalojar a los dirigentes elegidos por las bases, colocando en su lugar a los partidarios de su gobierno”. Ello vulneró la vinculación de los movimientos sociales, como sujetos portadores de CPP, y el espacio político instituido.

Bolivia representa una experiencia muy rica en lo que respecta a las luchas que se dan desde dentro y contra el Estado; sin embargo, el momento de refundación del poder popular y soberano que podría emerger de la mano de los movimientos sociales, no se llegó a cristalizar por la falta de acuerdos políticos para manejar los conflictos entre bases y dirigentes.

Zibechi (2024), propone aprender del pasado al preguntarnos por las razones de semejante deriva que combina autoritarismo con corrupción, violencia sexual (como luego se verá) y apego al poder. Su aprendizaje le lleva a cuestionar las luchas que se centran

en conquistar el poder del Estado. La primera razón es que cuando se coloca en el centro la lucha por el poder, lo demás pasa a segundo plano, incluyendo en lugar destacado la ética y los valores. En segundo lugar, dice que “la historia nos enseña que la toma del Estado ‘termina por pervertir al revolucionario más fiel’, [...] desde el Estado no se puede transformar el mundo [ya que el Estado] es el camino más seguro para reproducir el capitalismo y el orden global...”

Chile

Probablemente, la irrupción de la juventud como portador de comunidad política de pertenencia, sea el factor más característico del estallido social chileno. La presencia de personas independientes del campo instituido del régimen político y de partidos, cuyas acciones, sin embargo, están sometidas al escrutinio público de sus organizaciones y acciones colectivas. A raíz del estallido social se acentúa la brecha entre lo instituido: las elecciones, las políticas públicas; y lo instituyente: las asambleas, las acciones callejeras, la prefiguración de demandas hacia el Estado.

Se acumularon frustraciones dejadas por el campo institucional al no resolver de fondo las demandas planteadas por los movimientos sociales: pocos avances en la exigencia de gratuidad de la educación; severos límites del sistema de pensiones; fracturas sociales que impidieron un nuevo pacto social; falta de reconocimiento de los pueblos originarios, lo que impidió el avance de propuestas interculturales, plurinacionales. Pero, a pesar de ello, lo que se profundizó es una sensación ambigua entre que los cambios deben ser institucionales, aunque sean lentos y cuesten mucho; y que la transformación requiere de mayor velocidad ante la urgencia de las crisis vividas.

En el caso chileno, se presentan nítidamente tres polos alrededor de los cuales giran las luchas por la transformación política: 1) el progresismo y sus afanes por instaurar un Estado renovado,

aunque fuera de la ortodoxia de la primera ola de los gobiernos progresistas, con redistribución de la renta y justicia social; 2) luchas contra y desde dentro del Estado, en donde aumenta la tensión entre movimientos sociales y gobierno, lo cual incluye un momento electoral; y 3) los movimientos de pueblos originarios –particularmente del pueblo mapuche– por conseguir comunidades autónomas desde afuera y al margen del Estado políticamente constituido, saliendo de procesos electorales y de políticas públicas de contención, incluida la redistribución estatal de la renta.

Colombia

Después del estallido social de 2019, los movimientos sociales se vienen vinculando con referentes políticos con sentido de pertenencia. Aunque no hay una sola dirección, ya que los partidos políticos reconfiguran sus estructuras: los partidos tradicionales participan en la oposición y los partidos políticos progresistas participan en la coalición política gobernante con renovadas bases sociales que provienen de los movimientos sociales. Aunque las narrativas públicas hablan de polarización, ni el polo progresista ni el polo opositor responden a un proyecto único. Cada uno de esos proyectos políticos se confronta en la arena pública; el empresariado ejerce fuertes presiones sobre la política económica y social del gobierno, una de cuyas expresiones fue el paro empresarial nacional de transportistas del 1 de septiembre de 2024 en contra del aumento del diésel. “Además de Bogotá, el paro [se sintió] en corredores viales de 23 departamentos, entre ellos Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Meta. De acuerdo con cifras de las autoridades, se [registraron] 153 actividades de protesta y 89 bloqueos permanentes. [...] 38 bloqueos intermitentes y 26 concentraciones, en 142 municipios, de 23 departamentos, con una participación aproximada de 5.577 personas y 1.881 vehículos” (EFE, 2024).

Además de las presiones empresariales contra la política económica de Petro, los proyectos comunitarios emancipadores enfrentan una creciente judicialización de la política, la cual se expresa en numerosos campos. Frente al gobierno de Petro, la alianza entre el Poder Judicial y grupos empresariales vinculados con el uribismo, ha significado el torpedeo sistemático de la lucha anticorrupción, diversos impedimentos de políticas de Estado relativas a la equidad y la justicia social, la complicidad con grupos paramilitares del crimen organizado y con el poder oligárquico en las regiones colombianas, el asesinato sistemático de líderes populares, especialmente de personas participantes en las negociaciones de paz, la obstrucción de la justicia frente a comunidades vulnerables, particularmente de pueblos originarios y afrodescendientes. Se trata de criminalizar la protesta social, descalificar el impacto social de la violencia, escondiendo la racialización y su orientación contra las mujeres.

Ecuador

En los procesos electorales se decantan sujetos que son portadores de transformaciones sociales, en los que se gestan comunidades políticas de pertenencia que luchan desde dentro y contra (d) el Estado y organizaciones comunitarias autónomas que luchan por desaparecer al Estado. En febrero de 2025 Ecuador volverá a las urnas para celebrar elecciones generales, en las cuales se elegirán un binomio presidencial, 151 asambleístas y cinco parlamentarios andinos. César Ulloa (2024) afirma que estamos ante “un ciclo atípico, pues antecede a este proceso la muerte cruzada o disolución de la Asamblea que se produjo por decreto ejecutivo en la administración del expresidente Guillermo Lasso en mayo de 2023 y que adelantó las elecciones para un periodo corto”.

Ecuador cuenta con 290 agrupaciones con registro electoral para inscribir candidaturas locales. Donde el número de aspirantes al

poder excede, vertiginosamente, a los que se eligen para los distintos cargos populares. Esta proliferación de agrupaciones genera dos fenómenos anómalos para una democracia saludable: fragmentación y volatilidad. Para Ulloa (2024) “no hay fidelización ni ideología, más bien se ha exacerbado la personalización política, los outsiders y el populismo. Otro problema que se agudiza es que los partidos seleccionan a sus candidatos por fuera de los partidos [...]”.

Las izquierdas llegan a esta elección más fragmentadas que en ocasiones anteriores, pues algunos disidentes del correísmo corren por cuenta propia. Además, el movimiento indígena va solo con el líder de los dos últimos estallidos de protesta nacional como alternativa, Leónidas Iza. Ulloa (2024), ve que “Para el caso de las derechas, ocurre lo propio, pero sin mayor fragmentación”. Aunque las encuestas favorecen la candidatura anticorreísta del actual presidente de Ecuador, la competencia con al menos otros tres candidatos: la correísta Luisa González, el “centrista” Jean Topic y Leónidas Iza por la CONAIE-Pachakutik, no logra suficiente distancia para que la elección presidencial se resuelva en primera vuelta. De tal manera, que el éxito opositor en la segunda vuelta dependerá de la convergencia entre el correísmo y sus críticos.

Si Daniel Noboa puede presentar su candidatura, sus banderas serán el anticorreísmo, el hecho que representa la nueva generación política y un gobierno de mano dura contra la delincuencia y la corrupción. Frente a ello, (Ulloa, 2024) “se le endilga al actual mandatario improvisación, inexperiencia, una suerte de exceso de juventud para afrontar los problemas más severos y que giran en torno a la inseguridad, el crimen organizado, la narcopolítica y la crisis energética”.

Haití

Las élites haitianas han utilizado durante mucho tiempo grupos armados no estatales como herramientas para imponer su autoridad

política y económica. Sin embargo, es poco probable que se produzca un cambio positivo a largo plazo a menos que se combatan las raíces de la expansión de las pandillas. Como lo señala el Observatorio en Comunicación y Democracia. (2024 b): “Esas élites han proporcionado fondos, armas e impunidad a las pandillas, a cambio de lo cual éstas ayudaban a reprimir protestas, garantizar la victoria de determinados candidatos en las elecciones y proteger territorios para negocios legales e ilegales”. De tal manera que las comunidades políticas de pertenencia antiautoritarias, herederas del estallido social de 2019, enfrentan enormes dificultades para hacer avanzar políticas de reconocimiento y de identidad con sentido democrático popular.

Las CPP no se acotan a una dimensión geopolítica local o nacional. Estados Unidos y Canadá han tratado de romper los lazos entre las pandillas y las élites haitianas, pero estas medidas no son eficaces, pese a imponer sanciones a algunos de los políticos más influyentes y poderosos empresarios, incluidos dos ex presidentes, dos ex primeros ministros y varios ex senadores acusados de haber apoyado directa o indirectamente a las pandillas. También, Naciones Unidas estableció un régimen especial de sanciones en octubre de 2022 para evitar vínculos entre las pandillas y sus patrocinadores externos. Incluso el despliegue de la misión de seguridad multinacional liderada por Kenia y autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de 2023, supuestamente para ayudar a la policía a enfrentar a las pandillas, y preparar el terreno para las elecciones, se han visto empañadas por discordias internas, frente a las cuales la presencia de unos 400 policías kenianos no ha podido hacer algo significativo (Observatorio en Comunicación y Democracia, 2024 b).

Se espera que el gobierno de transición nombrado en 2024 organice elecciones generales para que las autoridades locales, regionales y nacionales puedan asumir sus cargos en febrero de 2026, casi diez años después de las últimas elecciones. Antes, se debe nombrar un consejo electoral provisional, que organice el sistema de

votación del país. Y, a la par, propicie un proceso de reforma constitucional antes de que se celebren las elecciones. Se puede decir que, en una situación similar a los Acuerdos de Paz en Colombia, la pacificación de Haití pasa por definir negociaciones con todos los grupos involucrados, tanto las comunidades políticas de pertenencia con raíces democráticas, como las CPP de corte autoritario.

En 2024, poco después de que se estableciera el gobierno de transición, Jimmy Chérizier, el portavoz de facto de la coalición Viv Ansanm, propuso que el gobierno y las pandillas se sentaran a hablar (Citado por Segura y Da Rin, 2024): “Necesitamos diálogo hoy, Sr. Primer Ministro. Demuestra al mundo que puedes hacer historia como alguien que... pacifica al país”, dijo Chérizier (más conocido como “Barbacoa”) en un vídeo en línea. Conille respondió diciendo que los bandidos deben “dejar sus armas y reconocer la autoridad del Estado antes que cualquier otro acuerdo”. Se ciernen esperanzas en el Movimiento Nacional por la Libertad y la Igualdad de los Haitianos por la Fraternidad (Mouvement National pour la Liberté et L'égalité des Haïtiens pour la Fraternité, MOLEGHAF) CPP que denuncia: “la élite haitiana utiliza a los paramilitares para aplastar la resistencia popular” con el fin de mantener a Haití bajo la ocupación estadounidense.

Puerto Rico

Los principales impulsores del conflicto político en Puerto Rico durante 2024 provienen de una compleja constelación de actores que sustentan el estatus colonial, que debaten sobre la identidad cultural boricua contra identidades subordinadas por la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos; aunque la falta de consenso sobre las opciones de estatus (estatalidad, independencia o autonomía reforzada) exacerba las tensiones entre las comunidades políticas de pertenencia, entre los partidos políticos y la población, o en los temas de identidad y nacionalismo puertorriqueños

que influyen en las percepciones de ciudadanía, comunidad y pertenencia dentro del marco colonial. El impacto de la crisis económica ligada con la dependencia de Estados Unidos en el marco de un colonialismo interno, y la persistente violencia política –terror estatal colonial– por parte de las autoridades estadounidenses y puertorriqueñas, que sirve para reprimir la disidencia y mantener el control. Esta violencia contribuye a un clima de miedo y resistencia, que complica el panorama político y alimenta el conflicto. Estos factores, ya resaltados en la arena pública por los estallidos sociales de 2019, contribuyen a los debates en curso sobre el posible rol emancipador de las comunidades políticas de pertenencia, en torno de la ciudadanía y la gobernabilidad democrática.

Los estallidos sociales de 2019 se proyectan hasta la actualidad (2024) en el acentuamiento del difícil tránsito de los movimientos sociales hacia comunidades políticas de pertenencia. En el caso de Puerto Rico, el balance es positivo, ya que las luchas por democratizar al Estado, tomando en cuenta las particularidades nacionales y del contexto geopolítico internacional, van ganando terreno. Las elecciones de noviembre de 2024 muestran que el estallido desembocó en el fortalecimiento de opciones decoloniales, independentistas con una autonomía reforzada, en la vinculación de demandas antineoliberales, antipatriarcales, por la justicia socioambiental, en contra del extractivismo, por una justicia redistributiva del ingreso, y por una adecuación fiscal contraria a la austeridad y al régimen privatizador que impulsan las oligarquías locales aliadas con el poder gubernamental estadounidense.

Desde dentro y contra el Estado es una lucha que debate sobre el progresismo en la complejidad de una lucha por la independencia y la autonomía. En la medida que el progresismo puertorriqueño no ha gobernado ese país, y que hay una coalición política electoral, fortalecida por el estallido social de 2019, Puerto Rico registra experiencias organizativas exitosas que comprenden una opción electoral, pero que es rebasada por procesos instituyentes de conformación de comunidades políticas de pertenencia que cuentan

con lazos orgánicos con el movimiento sindical y por numerosas acciones colectivas que desembocan en el plano de la política y del poder nacional, local y que presenta desafíos a la estructura instituida de la Unión Americana.

Algunos comunistas con nexos con pares políticos en Estados Unidos apoyaron críticamente la Alianza de País. Ellos, como el grupo Rumbo Alternativo (2024), reconocieron que “la Alianza ofrecía la posibilidad de lograr el objetivo importante y necesario de romper con el sistema bipartidista tradicional, pero que esto no era suficiente para satisfacer los intereses de la clase trabajadora. Para que esto suceda, es necesario que la clase trabajadora tenga su propia organización política, su propio partido de los trabajadores revolucionarios”. Aquí tenemos una muestra de lo que acontece alrededor de la tensión entre movimientos sociales portadores de sentido comunitarista y procesos progresistas que conquistaron un gobierno nacional, o que están batallando por conformar una propuesta progresista para ganar al gobierno de un país, en este caso, Puerto Rico.

Caravanas migrantes

Este libro abre interrogantes, muchas de las cuales merecen ser investigadas posteriormente. Entre ellas destaca lo que se refiere a políticas de pueblo (“pueblos en movimiento”), pues, aunque la literatura estudiosa del fenómeno migratorio colectivo organizado ha crecido junto con las Caravanas Migrantes, hace falta sistematizar el contenido anticapitalista que encierran esas acciones colectivas, contra el despojo, contra las herencias coloniales y patriarcales, contra los efectos ambientales, como es el caso de la migración climática, pues las sequías, tormentas e inundaciones han desplazado a miles de personas. Y ello ha impulsado formatos comunitarios organizados, en aquellos casos donde se vinculan luchas locales y agendas supranacionales o globales, en donde existe un tejido

comunitario previo. Así, las migraciones contemporáneas han trastocado redes y espacios de sociabilidad entre migrantes y residentes nacionales en el ámbito de políticas públicas migratorias y en el espacio de las relaciones de poder territorializadas, particularmente dentro de los procesos electorales de la región y, particularmente, en Estados Unidos. Pues el destino buscado por las Caravanas es refugiarse en ese país.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 se debe en gran medida al paquete antimigratorio de su campaña electoral: el fin de las políticas de regularización, el endurecimiento de la frontera con México, y ¡la mayor deportación masiva en la historia de la humanidad!: “La guerra contra los migrantes es un fenómeno en ascenso que contempla modalidades de deshumanización política y jurídica frente a los claroscuros de la ‘no ciudadanía’, y la expansión de un régimen de apartheid con diques fronterizos que operan como agujeros negros de los (muy postergados) derechos universales” (NODAL, 2025). De tal manera, que crece la brecha entre las expectativas de las personas migrantes que se han organizado colectivamente en las Caravanas Migrantes y la falta de reivindicaciones relativas a su derecho humano al refugio en el país de su destino.

Una parte nodal de la extrema derecha en el mundo es la agenda antiinmigrante; así se expresa en lo que será el gobierno de Donald Trump que prevé suspender “tres de las políticas de regulación migratoria más importantes: la *Parole in Place*, que concede la residencia a las parejas de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses con más de diez años de permanencia en el país; la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y las visas de trabajo H-1B (NODAL, 2025).

Sin embargo, durante los últimos meses de 2024, ha habido actitudes de resistencia por parte de comunidades políticas de pertenencia instituidas en América Latina y el Caribe, con el fin de contrarrestar la necropolítica antiinmigrante de la potencia mundial, quien criminaliza a la población migrante calificándola como

una “amenaza para la salud pública” que transmite diversas enfermedades contagiosas, como delincuentes del crimen común y organizado, como desquiciados mentales –come mascotas– que atentan contra la cultura e identidad nacional estadounidense. Contra esa postura, los gobiernos progresistas de nuestra región buscan convergencias político-diplomáticas. Gustavo Petro criticó el impulso de una política de terror basada en el racismo y la xenofobia que expone gravemente a la comunidad migrante; Claudia Sheinbaum está convocando a reuniones presidenciales entre los países afectados por la deportación-expulsión de migrantes; Xiomara Castro, prevé eliminar la concesión de bases militares en Honduras, puesto que población hondureña se verá afectada por esas expulsiones. Varios gobiernos afectados por la deportación coinciden en la necesidad de definir políticas nacionales e internacionales que aborden las causas raigales de la migración internacional forzada.

3) Modos bajo los que se conforman las agendas (geo)políticas en las comunidades políticas de pertenencia.

- Anticapitalismo que cuestiona el orden internacional, nacional y “glocal”.
- Lucha contra el enfoque estadocéntrico desde movimientos sociales “politizados”.
- Democracia y procesos electorales en torno de las comunidades políticas instituidas; tensiones entre gobiernos progresistas e izquierda social.
- Violencia sistémica, procesos de paz, derechos humanos, agenda antipatriarcal.
- Luchas contra el racismo y diversas formas de discriminación de las minorías y de las disidencias.

Bolivia

La complejidad del estallido social de 2019 hizo emerger la importancia de la CPP en el ámbito geopolítico, pues luego de la pandemia del COVID-19, el litio y el gas bolivianos reforzaron el rol estratégico del Estado en la renta obtenida por vías extractivistas. De tal manera que los cuestionamientos anticapitalistas provenientes de movimientos politizados chocaron con las alianzas intergubernamentales planteadas por el gobierno de Luis Arce en el marco del Triángulo del Litio (Argentina-Bolivia-Chile). Asimismo, la lucha contra el enfoque público estatal estadocéntrico creó ciertas brechas entre los organismos sociales indígenas y campesinos con el gobierno boliviano.

Algo importante a destacar es que el estallido social de 2019 fortaleció el espacio electoral alrededor del cual las CPP disputaron el espacio político constituido, y que ello ya no es fuente de conflicto entre los contrincantes electorales. En contraste, la agenda anti patriarcal se encuadra dentro de las disputas entre Evo Morales y Luis Arce. Zibechi (2024) señala que el actual gobierno “ventila y amplifica las violaciones de mujeres cometidas por Morales, quien tuvo un hijo con una chica de 15 años y se le conocen unos cuantos casos de relaciones sexuales con menores cuando era presidente. [Morales] cometió ‘estupro’ continuo a lo largo de todos sus gobiernos”. No obstante, es inquietante que no sea la justicia la que anime las prácticas de unos y otros, sino la revancha y el ataque político entre ambos bandos.

También hay que destacar que la fuerza ganada por los movimientos sociales feministas y en contra del racismo se fortaleció luego de 2019 en la medida que el gobierno de Arce ha acotado los impulsos racistas de la derecha y ultraderecha en las regiones bolivianas donde cuenta con una base social racista y patriarcal.² A pe-

² Además de movimientos interseccionales feministas autónomas, es importante destacar algunas de las organizaciones de mujeres politizadas, como la Confederación

sar de ello, las raíces excluyentes y discriminadoras reaccionarias siguen convocando sentidos de pertenencia que conforman una base electoral que acecha al poder estatal.

Chile

La conformación de las agendas (geo)políticas en las comunidades políticas de pertenencia, tuvo repercusiones en las políticas financieras de ajuste y austeridad globales, al menos al cuestionar los treinta años recientes de neoliberalismo a la chilena. La lucha contra el incremento de la tarifa del Metro fue percibida como el símbolo de un sistema económico y político que favorecía a las élites a expensas de la mayoría. Concatti (2024) señala que, según el informe World Inequality Report de 2022, el 1 % más rico de Chile concentra el 49,6 % de la riqueza total del país.

A través de redes sociales, los jóvenes coordinaron acciones, organizaron manifestaciones y documentaron la represión policial. Se combinaron la lucha contra la desigualdad social y contra la concentración de la riqueza y la lucha contra la injusticia y por revalorizar la memoria. Sin embargo, esas luchas sociales no se sincronizaron con la demanda de una constituyente pacífica que ordenara nuevos pactos y contratos sociales. En una encuesta del CEP en 2019, el 80 % de los jóvenes de entre 18 y 29 años veía en las manifestaciones una expresión legítima del descontento social, sin embargo, en octubre de 2024, solo el 23 % de los chilenos apoyaba las movilizaciones que impulsaron el proceso constituyente, una caída significativa respecto al 55 % registrado en 2019.

Si bien el primer gran paso hacia la redacción de una nueva Constitución se dio en octubre de 2020, cuando el 78 % de los chilenos

Nacional de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas “Bartolina Sisa”, La Subcentral de Mujeres Indígenas del Tipnis, o la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra.

votó a favor de iniciar el proceso constituyente en un plebiscito histórico, fue en mayo de 2021 que se eligieron a los 155 miembros de la Convención Constitucional encargada de redactar la nueva Carta Magna. Como reflejo de la diversidad social y política de Chile, se registró una fuerte presencia de independientes y representantes de movimientos sociales, además de ser paritaria en términos de género. No obstante, que se rechazó el proyecto constituyente de 2021, el proceso continuó. En 2023, se lanzó un segundo intento de Constitución, pero esta vez el panorama cambió significativamente, pues la elección de los redactores representó una victoria para miembros de partidos de derecha y sectores conservadores.

Ante ambos fracasos constituyentes, el gobierno de Boric tuvo que resignarse a la preservación de la Constitución aprobada en 1980, tratando de rescatar las reformas progresistas logradas en su devenir. Al respecto, Concatti (2024), dice que “A cinco años del estallido social que exigió un cambio profundo en el modelo político y económico, el camino hacia las reformas estructurales sigue sin materializarse de manera significativa, mientras que la desconfianza en las instituciones continúa creciendo”. A finales de 2024, el 50 % de los chilenos considera que el estallido social fue “muy malo o malo” para el país, lo que sugiere un cambio de percepción sobre el impacto del movimiento.

Colombia

El proyecto gubernamental emancipador de “Paz Total” enfrenta obstáculos que reproducen la apuesta neoliberal, y la campaña conservadora que judicializa la política. Si bien el objetivo inicial de los Acuerdos de Paz fue involucrar a todos los grupos armados, la narrativa conservadora pretende descalificar el sentido incluyente de los Acuerdos: “los delincuentes no tienen derechos”, “mano dura contra la guerrilla”, “a los vándalos no se les protege, se les extermina”. Eduardo Restrepo (2023), argumenta que la desigualdad y

violencia en Colombia están arraigadas en un orden moral jerarquizado que produce existencias “dispensables” marcadas por el desprecio y la indiferencia.

A la oposición conservadora de cara a los Acuerdos de Paz, se suman las fuertes diferencias entre el gobierno y el ELN. En 2024, tras un violento ataque del Ejército de Liberación Nacional, las negociaciones se suspendieron, sin que ello haya significado un cambio de objetivos maximalistas a acuerdos más pragmáticos e incrementales. El ELN como comunidad política de pertenencia tiene divisiones internas. En abril de 2024, el gobierno colombiano sofocó una rebelión encabezada por el frente Comuneros del Sur, en Nariño. Además, la grave situación que afrontan las poblaciones en departamentos como Arauca, Chocó y Nariño, entranpan las negociaciones nacionales confrontadas a los espacios locales. El apoyo público al proceso de paz está menguando, lo que requiere mejoras visibles en la seguridad para restablecer la confianza en el diálogo. De acuerdo con Insuasty (2024) “Las tensiones en los diálogos de paz reflejan desacuerdos internos en el Gobierno de Petro y dudas sobre el enfoque utilizado que evidencia en últimas seguir priorizando el Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) como objetivo, sin avanzar hacia transformaciones estructurales que solucionen las causas profundas del conflicto”.

En noviembre de 2024 se conmemoraron los cinco años del estallido social que detonó grandes transformaciones de la constelación de actores sociales que convergen en la transformación sociopolítica colombiana. Para conmemorarlo, las centrales obreras colombianas protagonizaron una movilización popular en las principales ciudades del país en respaldo a las reformas sociales, promoviendo la paz y la unidad. La marcha respaldó, además, la democracia y la línea de gobierno seguida por el presidente Gustavo Petro, basada en el respeto a los derechos humanos, la soberanía y la paz. Asimismo, el pueblo alzó su voz contra los intentos desestabilizadores y de golpe blando que llevan a cabo los sectores opositores del país. En Colombia, el estallido social de 2019 y las

subsecuentes movilizaciones populares, muestran que hay un tejido novedoso de comunidades políticas de pertenencia con sentido emancipador.

Ecuador

De acuerdo con el Observatorio en Comunicación y Democracia (2024), “El gobierno de Noboa se ha caracterizado por la sociedad del espectáculo, el Estado policial, la militarización del territorio, y la crisis humanitaria en las cárceles con una frontal deshumanización de la población carcelaria. [...] Ecuador es el país más violento de toda América Latina: los asesinatos aumentaron en un 600 % desde 2019”. Se impone así un Estado punitivo de la mano dura, contrario a la satisfacción de las demandas detonadas luego del estallido social de 2019.

La declaración del Conflicto Armado Interno (CAI) el 9 de enero de 2024, le dio al gobierno de Noboa un paraguas institucional, para ejecutar tres acciones fundamentales para la transformación de las funciones de los aparatos represivos del Estado: primero el impulso de una militarización del espacio público a nivel nacional, con especial énfasis en sectores periurbanos pauperizados y zonas rurales; en segundo lugar, la estrategia de vigilancia y control de la Policía Nacional, que ha mutado de la relativa pasividad a la agresión directa como mecanismo de coerción; y, en tercer lugar, la militarización de las cárceles y centros de privación de libertad del país, con carta blanca para cualquier tipo de abuso (Observatorio en Comunicación y Democracia, 2024).

Al declarar que el conflicto interno se encuadra en acciones terroristas, Noboa pretende cambiar la actual Constitución ecuatoriana, en la que no se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Lo cual requiere de una reforma parcial

que, según la misma Constitución, se debe hacer vía referéndum. Noboa trata de revivir la presencia militar estadounidense, ya no en Manta, donde Correa evitó el establecimiento de una base militar, sino en las Islas Galápagos, por su potencial geopolítico de contribuir a la seguridad de Estados Unidos, y no tanto, de combatir al narcotráfico en la plataforma continental ecuatoriana.

Además de la crisis autoinducida en el sector energético, lo que ha hecho Noboa es “incrementar el IVA al 15 %, subir el precio de las gasolinas extra y Ecopaís, invertir lo mínimo en el Plan Anual de Inversiones, promover las alianzas público-privadas para la concesión (privatización) de las empresas del Estado, profundizar el extractivismo, favorecer a la empresa privada” (Observatorio en Comunicación y Democracia, 2024). Ello ha implicado una ola de despidos que incrementan el desempleo, la descomposición de la producción agropecuaria pequeña y mediana, la expulsión de más de 200 mil personas del país, vía migraciones forzadas. El Observatorio en Comunicación y Democracia, concluye que: “Entre el racismo institucionalizado, la deshumanización de los presos, y la persecución y criminalización de la organización y los sectores populares, el Estado policial sigue cobrando vidas en los sectores populares. La generación del consenso ha sido exitosa en el país, no solo logró justificar esta transición hacia un estado de control estatal más elevado, sino que distorsionó en la opinión pública el concepto de crimen organizado”.

Haití

De acuerdo con Heine (2024), “Este es un país sumido en la violencia, con un Estado fallido por excelencia, donde las pandillas han asesinado a unos 12 mil haitianos desde 2021, alcanzando la cifra de 600 mil desplazados (en un país de 11 millones de habitantes). A lo anterior se suman cinco niños muertos o heridos a bala a la semana y a una ciudad capital, Puerto Príncipe, controlada en un

80 % por las pandillas”. Frente al fenómeno de los desplazamientos internos forzados, causados por el poder de las pandillas, se dificulta el tránsito de las acciones colectivas hacia comunidades políticas de pertenencia, en función de la violencia ejercida por los grupos pandilleros.

La migración internacional representa un desafío cuya agudeza produce una destrucción del tejido social nacional. En primer lugar, la difícil convivencia de la migración haitiana con la población de República Dominicana. Según la Dirección General de Migración de República Dominicana, en el primer semestre [de 2024] se deportó a sus países a 67.844 extranjeros, de ellos la inmensa mayoría haitianos (66.227). Paralelamente, “el Gobierno de Haití denunció [el martes 8 de octubre de 2024] en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que República Dominicana está llevando a cabo una estrategia de ‘limpieza étnica’ con su política de deportaciones masivas de migrantes haitianos” (Korn, 2024).

En este contexto, afirma Korn (2024), que la Canciller de Haití, Dominique Dupuy alertó a las autoridades internacionales pertinentes sobre “las brutales escenas de redadas y deportaciones” que, según denunció, se registran en la República Dominicana contra sus compatriotas. Asimismo, anunció próximas reuniones con organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales que operan en la zona fronteriza para definir una estrategia de apoyo a las personas afectadas. La migración internacional haitiana enfrenta dificultades para conformar una agenda multilateral. Por una parte, el gobierno de R. Dominicana se rehúsa a tratar esos temas cuando se rebase la relación bilateral y, por otro lado, las migraciones hacia Estados Unidos, una buena parte de ellas a través de México y en alguna medida participando en las caravanas migrantes organizadas, tampoco encuentran espacios de tratamiento de carácter multilateral.

Como lo asienta Heine (2024) “Según el Banco Mundial, Haití no solo es el país más pobre de las Américas, sino que de los más

pobres del mundo. Un 87 % de la población vive bajo la línea de la pobreza y un 30 % bajo la de la extrema pobreza. La expectativa de vida es de apenas 63 años, versus 72 años en América Latina y el Caribe en su conjunto, y 81 años en Chile”. Sin embargo, lejos de considerar las causas sistémicas estructurales que causan la migración, a la población haitiana migrante se le discrimina por su estatuto racial, económico y nacional. Colomé (2024) nos recuerda que Donald Trump le estampó una risa trágica al tema de la emigración en el debate presidencial ese año, pues él “Aseguró que, en Springfield, una pequeña ciudad que ha acogido a casi 20 mil inmigrantes en los últimos cuatro años, muchos de ellos haitianos, ‘la gente que ha llegado se está comiendo a los gatos, se está comiendo a los perros, se está comiendo a las mascotas de la gente que vive ahí’”. Las cifras apuntan a que una sexta parte de los haitianos vive fuera de su país. Siguiendo con Colomé (2024): “En 2023, la diáspora haitiana en Estados Unidos sumaba más de 731 mil personas, la quinta población más numerosa nacida en el extranjero, que representa el 16 % de los 4,6 millones de inmigrantes caribeños, el mayor número después de los cubanos, los dominicanos y los jamaicanos”.

Puerto Rico

Podemos distinguir dos modos bajo los que se conforman las agendas (geo)políticas en las comunidades políticas de pertenencia. Coss (2023), evidencia que las agendas políticas progresistas transformadoras son, como siempre, acosadas por los medios corporativos, que “intentan invisibilizar al liderato del MVC y el PIP e inculcar que se trata de una alianza ‘comunista, terrorista, independentista y subversiva’, recurriendo a su arma principal que ha sido el miedo”. Bajo una segunda modalidad, están las agendas (geo) políticas neoliberales: las fuerzas políticas que han vivido de robarle al erario público y que se han organizado a través del PNP-PPD. Propone Coss (2023) que “En esencia, son dos empresas neoliberales y

corruptas, pues se dedican al robo del presupuesto gubernamental, privatizando los servicios públicos y manejando para su beneficio, los fondos federales de USA. No hay ningún compromiso social de servir, sino de servirse”.

La coalición progresista independentista arroja una agenda anticapitalista que cuestiona el orden internacional, nacional y “glocal”. Para la coalición derechista *La democracia es prosperidad*, el MVC representaba el socialismo y el comunismo, vinculados con Cuba y Venezuela. Según Rumbo Alterno (2024) “es por lo que toda la propaganda se centró en desacreditar y demonizar al MVC y no al PIP. Para hacer esto, estas corporaciones invirtieron más de dos millones de dólares (en radio, televisión, prensa y redes sociales) y presionaron a sus respectivos empleados para que votaran en contra de la Alianza”.

Aún es temprano para situar una lucha contra el enfoque estadocéntrico en el que incurren los gobiernos progresistas, quienes son cuestionados desde movimientos sociales “politizados” que no están insertos dentro de la estructura gubernamental. Si acaso, la experiencia progresista de gobernar San Juan, la capital nacional, muestra que se está construyendo una nueva narrativa de gobierno, que redefine los cánones democráticos liberales, mediante prácticas innovadores de buen gobierno, de consultas plebiscitarias en torno del estatuto político de Puerto Rico, y de espacios de convergencia entre las demandas producto de la movilización social y los tres poderes de gobierno.

Si bien es cierto que se desplazó al PPD a un tercer lugar en cuanto a los votos para la gobernación se refiere, esa institución continúa teniendo control de una mayoría de las alcaldías, y además aumentó dicho control de 40 a 45 pueblos de la isla. El PPD seguirá teniendo control sobre una destacada parte de la administración pública del país. Además, el PPD obtuvo la candidatura nacional más votada en la figura de Pablo José Hernández como comisionado residente con un 45 % de los votos (Coss, 2023).

“Hay una isla flotante de basura en medio del océano en este momento. Creo que se llama Puerto Rico”, palabras pronunciadas por el comediante Tony Hinchcliffe durante un acto de campaña de Donald Trump en Nueva York (27 de octubre de 2024), que desataron una ola de indignación entre los puertorriqueños, tanto dentro como fuera de la isla. Faltaba poco más de una semana para las elecciones presidenciales en EE. UU., en las que más de 5 millones de personas de origen puertorriqueño tienen derecho a voto. (BBC News Mundo, 28 de octubre de 2024). Una narrativa bendecida por el trumpismo, que penetra en el racismo y colonialismo interno puertorriqueño. Frente a lo cual hay contranarrativas críticas, como la de Bad Bunny, quien crea sus canciones tejiéndolas con movimientos sociales o con perspectivas proindependentistas, antirracistas y feministas actualmente.

Caravanas migrantes

La constelación de redes y actores que participan en movimientos sociales transnacionales como las Caravanas Migrantes desafían por su complejidad y novedad los modos bajo los que se conforman las agendas (geo)políticas en las comunidades políticas de pertenencia. Esta obra apunta algunos rasgos y tendencias que influyen en la institucionalidad de los regímenes políticos y del Estado, tanto como en los procesos instituyentes que, desde la esfera social, étnica, comunitaria, por género, configuran lo que denominamos “otra política”, destacando los proyectos emancipatorios. Estamos ante una línea de investigación cuya complejidad desborda los alcances presentados en este libro. Pese a la imposibilidad de dar cuenta de la totalidad conceptual y empírica del fenómeno, esta obra colectiva se arriesga a establecer ciertas constataciones que contribuyan a situar un análisis tan complejo en su estructuración y con tan amplias repercusiones en la política como arena de conflictos y, a la vez, como espacio de posibles convivencias humanas.

Una primera conclusión es que las poblaciones en movimiento reconfiguran el espacio geopolítico local, de manera directa, en el tránsito de las Caravanas por comunidades de pertenencias territoriales. El carácter transfronterizo de estos movimientos modifica el mapa social de lo local y las relaciones entre Estado y sociedad a través de múltiples vías. Una de las principales es la encarnación del racismo en la política de los cuerpos, de las personas. Un racismo que crea adeptos, que aglutina odios, que moviliza al electorado, en torno de una necropolítica normalizada con chivos expiatorios a la medida de las campañas electorales. Para responder a estos interrogantes, coincidimos con Ruiz-Estramil (2024) en que pensar las migraciones quizá sea un buen ejercicio para analizar las relaciones de poder que se están fraguando entre los Estados y las personas. Es sobresaliente pensar en sistemas complejos de actores-red, en las constelaciones que se forman debido a la acción colectiva y su impacto en la organización política frente a la trama de Estados nacionales, sus instituciones orientadas hacia el control de la migración y los soportes electorales tan cambiantes en cada coyuntura nacional y en el entramado internacional.

¿Qué tanto y cómo pesan las caravanas migratorias en la conformación de una agenda anticapitalista que cuestiona el orden internacional, nacional y “glocal”? Parte del problema es que la atomización de las demandas reivindicatorias, relativas a colectivos migrantes, impide ver cierta unificación de expectativas en un programa comúnmente asumido. Dificultad que se acentúa por el carácter transnacional y transfronterizo de los conflictos que se abordan, temas como el derecho internacional a migrar se unen a reivindicaciones de estatutos migratorios incluyentes en los países de tránsito y de llegada de las personas migrantes. O cambios en las legislaciones nacionales que abran sus ordenamientos hacia la doble nacionalidad, o figuras transitorias adaptadas a la movilidad y paso junto con derechos a obtener la nacionalidad en países de destino de la población migrante.

Ganar la narrativa sobre los aportes de las personas migrantes al crecimiento económico de los países receptores es crucial para entender la migración como base laboral de una economía de explotación, que requiere ser contrapesada: “Según la Fundación Nacional para la Política Estadounidense (NFAP, por sus siglas en inglés), la migración es responsable del 88 % del aumento de la fuerza laboral de los Estados Unidos desde el 2019. [...] En el 2022, un informe del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) demostró que 10.9 millones de migrantes indocumentados contribuyeron con 96.700 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales. De esa monumental cantidad, por lo menos 59.400 millones fueron recaudados por el Gobierno federal. [...] el aporte fiscal de la fuerza laboral migrante indocumentada es mucho mayor que el de los aportantes nativos” (NODAL, 2025). De aquí que el análisis de las Caravanas Migrantes contribuye a una mejor comprensión del potencial aporte en la lucha contra el enfoque estado céntrico desde movimientos sociales “politizados”, que están creciendo, aunque todavía no encuentren una cristalización en formas coordinadas en comunidades políticas de pertenencia con fuerza instituyente para modificar a las CPP instituidas.

En resumen, entre 2023 y 2024, las caravanas migrantes fueron un reflejo de una crisis estructural en América Central, el Caribe e incluso Suramérica, y un desafío político para los gobiernos de la región, Estados Unidos y México. Las políticas migratorias en Norteamérica y nuestra región, se mantuvieron en constante evolución, y aunque hubo esfuerzos para mejorar las condiciones de vida en los países de origen y proteger los derechos de los migrantes, el fenómeno de las caravanas no cesó, continuando como un importante tema en la agenda política, humanitaria y social de la región.

Bibliografía

Ahumada, Consuelo (26 de noviembre de 2024). Colombia: Memoria del estallido social. *Las 2 Orillas*. https://www.las2orillas.co/memoria-del-estallido-social/#google_vignette

Aznarez, Carlos (12 de noviembre de 2024). Rafael Bautista y la grave crisis en Bolivia. *Telesur*. https://www.telesurtv.net/blogs/rafael-bautista-y-la-grave-tesis-...m=NewsletterEspañol&utm_campaign=NewsletterEspañol&utm_content=36

BBC News (28 de octubre de 2024). La furia por el comediante que durante un evento de Trump llamó a Puerto Rico “isla de basura” y se burló de los latinos. *BBC News Redacción*. <https://www.bbc.com/mundo/articles/c5yx8656qj6o>

Colomé, Carla Gloria (13 de septiembre de 2024). Ni perros, ni gatos: la situación real de los migrantes haitianos en Estados Unidos. *El País*. <https://elpais.com/us/migracion/2024-09-14/ni-perros-ni-gatos-la-situacion-real-de-los-migrantes-haitianos-en-estados-unidos.html>

Concatti, Lisandro (18 de octubre de 2024). A cinco años del estallido social en Chile: ¿transformación o desencanto? *El Salto*.

Coss, José (Papo) (31 de marzo de 2023). Los movimientos sociales y las elecciones de Puerto Rico 2024. *Rebelión. América Latina y Caribe*. <https://rebelion.org/los-movimientos-sociales-y-las-elecciones-de-puerto-rico-2024/>

EFE, Agencia de Noticias (6 de septiembre de 2024). El Gobierno colombiano dice que llegó “hasta el límite” para levantar el paro camionero. <https://efe.com/mundo/2024-09-06/gobierno-colombiano-dice-llegar-hasta-el-limite-para-levantar-paro/>

Harmony, Princess (2 de diciembre de 2024). La heroica resistencia armada en Puerto Rico. *Mundo Obrero. Workers World*. <https://www.workers.org/2024/12/82246/>

Insuasty Rodríguez, Alfonso (22 de septiembre de 2024). Crisis y oportunidades en los diálogos de paz con el ELN. *Telesur*, , disponible en: https://www.telesurtv.net/opinion/crisis-y-oportunidades-en-los-d...=NewsletterEspañol&utm_campaign=NewsletterEspañol&utm_content=44

Korn, Victoria (10 de octubre de 2024). ¿Limpieza étnica? Dominicana y la deportación masiva de haitianos. *Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico* (CLAE). <https://estrategia.la/2024/10/09/limpieza-etnica-dominicana-y-la-deportacion-masiva-de-haitianos/>

NODAL (2025). América Latina y el Caribe enfrentan la guerra contra la migración. Editorial Radio Red. *Nodal, Agencia Informativa*. <https://www.nodal.am/2025/01/america-latina-y-el-caribe-enfrentan-la-guerra-contra-la-migracion/>

Observatorio en Comunicación y Democracia (2024). Ecuador: Noboa y las lógicas del narcoestado. *Fundación para la Integración Latinoamericana*. <https://www.nodal.am/fundacion-para-la-integracion-latinoamericana/>

Observatorio en Comunicación y Democracia (23 de octubre de 2024 b). Haití, ahora bajo el imperio de las pandillas. *Fundación para la Integración Latinoamericana*. <https://estrategia.la/2024/10/23/haiti-ahora-bajo-el-imperio-de-las-pandillas/>

Paz-y-Miño Cepeda, Juan J. (31 de agosto de 2024). Ecuador: unidad de las izquierdas. Revista *Con Nuestra América*, AUNA-Costa Rica. <https://connuestraamerica.blogspot.com/2024/08/ecuador-unidad-de-las-izquierdas.html>

Restrepo, Eduardo (2023). *Desprecios que matan. Desigualdad, racismo y violencia en Colombia*. Guadalajara: CALAS/Editorial Universidad de Guadalajara.

Ruiz-Estramil, Ivana Belén (18 de diciembre de 2024). Las migraciones en tiempos de odio generalizado. *Blog de pueblos. El Salto Diario*. <https://www.elsaltodiario.com/revista-pueblos/migraciones-tiempos-odio-generalizado>

Rumbo Alterno (2024). Puerto Rico: una mirada crítica a las elecciones de 2024. *Revolutionary Communists of America*. <https://communistusa.org/puerto-rico-a-critical-look-at-the-2024-elections/>

Segura, Renata y Diego Darin (29 de agosto de 2024). Haiti's Window of Opportunity. What It Will Take to Stop Gang Violence and Promote Stability. *Revista Foreign Affairs*. <https://www.foreignaffairs.com/haiti/haitis-window-opportunity>

Telesur (21 de noviembre de 2024). Colombia se moviliza en conmemoración del estallido social de 2019. <https://www.telesurtv.net/colombia-se-moviliza-en-homenaje-a-estallido-social-de-2019/>

Ulloa, César (2024). Un Ecuador fragmentado irá a las urnas. *Revista Latinoamérica21*. <https://latinoamerica21.com/es/un-ecuador-fragmentado-ira-a-las-urnas/>

Zibechi, Raúl (30 de noviembre de 2024). Bolivia, o las miserias del poder. *La Jornada*.